

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA
JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL

Tausa, siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	257934089001-2021-0026-00
Proceso	Adjudicación de apoyos
Demandante (s)	Maria Medora Castro

En firme el auto admisorio de la demanda, surtido el traslado a la parte demandada a través de Curadora Ad Litem, quien contesto sin oposición, se torna viable citar a las partes para que concurran personalmente, a la audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento prevista en los artículos 392 del Código General del Proceso, en concordancia con lo plasmado en los artículos 372 y 373 ibídem, no obstante se observa que con las pruebas recaudadas hasta este momento procesal, se puede decidir de fondo el asunto.

Por tanto, procede el despacho a decretar las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio estime del caso necesarias para el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta para ello, que la decisión final a tomar en este proceso para dirimir las pretensiones, debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de ahí entonces que disponga la práctica de las pruebas peticionadas.

En consecuencia se **DECRETAN** por ser útiles, legales, conducentes y pertinentes para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes tanto en la demanda como en su contestación, con sujeción estricta a las limitaciones previstas en el artículo 168 del C.G.P., las siguientes:

POR LA PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Tener y decretar como pruebas documentales, dictamen médico de fecha 9 de noviembre de 2019, certificado de discapacidad del señor Bayardo Duran Goyeneche de fecha 05 de septiembre de 2018, registro civil de nacimiento de Sara Omaira Duran Castro e informe psicosocial rendido por la Comisaría de Familia de este municipio.

TETIMONIAL: No se decreta, toda vez que con las pruebas documentales aportadas hasta este momento procesal, se considera suficiente para tomar la decisión de fondo que en derecho corresponda.

POR LA PARTE DEMANDADA:

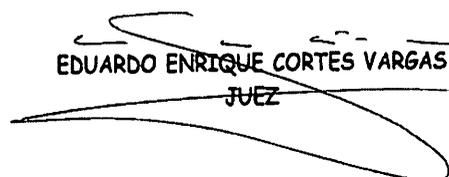
DOCUMENTALES: No hay lugar a decretar pruebas, toda vez que la Curadora Ad litem, desistió de la prueba de segundo dictamen médico al señor Bayardo Duran Goyeneche.

DE OFICIO

Por ahora no considera necesario, decretar pruebas, no obstante es de advertir que el despacho se **reserva** la facultad de decretar otras, hasta antes de tomar la decisión de fondo, como lo contempla el artículo 170 del Código General del Proceso siempre y cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la acción.

En firma esta decisión, ingrese el expediente al despacho a fin de dictar la sentencia que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


EDUARDO ENRIQUE CORTÉS VARGAS
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO

La providencia anterior es notificada por anotación en
ESTADO No. 34 Hoy 08-07-2021


Martha Isabel Gómez Vanegas
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL

Tausa, siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	257934089001-2015-0050-00
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	Maria Sanchez Rojas
Demandado (s)	Juan Alberto Peláez Amoroch
Tema y subtemas	Termina desistimiento tácito

ASUNTO

Procede el despacho a estudiar la viabilidad de dejar sin efectos la demanda elevada en este asunto, como también disponer la terminación del proceso con base en lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso en atención a que la última actuación dentro de las presentes diligencias data del día 5 de junio de 2019, día hábil siguiente a la notificación por estado de la decisión calendada 31 de mayo de 2019.

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el día 28 de abril de 2015, María Sánchez Rojas instauro demanda ejecutiva en contra de Juan Alberto Peláez, para hacer efectiva la acción cambiaria contenida en el cheque allegado con la demanda y así obtener el pago del capital contenido en el mismo, junto con los intereses de mora, por el valor de la sanción del 20% contemplada en el artículo 731 del Código de Comercio librándose para el efecto orden de pago por la vía ejecutiva de mínima cuantía en la forma solicitada, por auto del 12 de mayo de 2015, disponiendo en tal proveído la notificación a la pasiva, la cual se surtió personalmente el 15 de diciembre de 2015 quien no propuso excepciones, por tanto se dictó auto ordenando seguir adelante la ejecución, anotándose como última actuación, la decisión calendada 31 de mayo de 2019, fecha desde la cual se encuentra sin actividad procesal.

CONSIDERACIONES

Dispone el artículo 317 del C.G.P. en su numeral segundo que cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito, sin necesidad de requerimiento previo; anotando la norma que en este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes, desprendiéndose de la preceptiva normativa en referencia, que esta persigue sancionar el descuido de las partes con el proceso y el incumplimiento del deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, garantizando además el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, oportuna, eficaz y eficiente según lo contempla el artículo 229 de la Constitución Política.

Lo anterior, tiene su **fundamento** y **razón** de ser en el hecho de que con la **actitud** asumida por el interesado, a pesar del **termino** transcurrido para **impulsar** el proceso, se infiera **tácitamente** su deseo de **abandonar** el desarrollo de la **pretensión** que interpuso, siendo la figura del desistimiento tácito un **medio** o **forma anormal** de **ponerle fin** al **proceso** sin agotar la totalidad de sus etapas y por ende, no llegar a la fase de la sentencia y con la firmeza que le da la cosa juzgada, en el de tipo declarativo, o no se logra el cubrimiento completo de la acreencia, en el caso del ejecutivo; teniéndose en otras palabras, como lo sostiene la jurisprudencia, que el desistimiento tácito se sigue como **consecuencia jurídica** del **incumplimiento** de una **carga procesal** a cargo de la **parte** que **promovió** un **trámite**, y de la cual depende la continuación del proceso, pero no la cumple en un determinado lapso, con la cual se busca **sancionar** no sólo la desidia sino también el abuso de los derechos procesales.

No obstante, para dar **aplicación** a la aludida **figura**, dicho canon prevé que ésta se regirá por las siguientes **reglas**: para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes; **si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (02) años;** cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo; decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas; la providencia que decreta el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo; la providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo.

Igualmente establece la norma, que el **decreto del desistimiento tácito** no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos **seis (6) meses** contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obediencia de lo resuelto por el superior, pero serán **ineficaces** todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta; indicando también, que decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido, debiendo ordenar el juez la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar como el desglose de los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso, sin que todo lo anterior se pueda aplicar en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.

Descendiendo al caso que ocupa la atención del despacho, se observa que tal como se reseñó anteriormente, el presente proceso ha permanecido **inactivo** en la **secretaría del despacho** durante un término superior a **dos (2) años** sin que se hubiese adelantado algún tipo de impulso, gestión o solicitud por parte del interesado, evidenciándose de otro lado, que **no existe algún impulso oficioso**, de cualquier naturaleza, que **interrumpa** el término anotado, pues ha de recabarse que la última actuación data del **31 de mayo de 2019**, día siguiente a la notificación por estado de la decisión que aprobó la liquidación de costas, es decir a la fecha, ha pasado más del término de que trata la norma en comento, por lo tanto se cumplen con los supuestos fácticos previstos.

Así las cosas, tenemos que las consecuencias de tipo **sustancial** que origina la figura procesal del **desistimiento tácito**, se evidencian y deben ser aplicados en relación con las pretensiones formuladas en la demanda que dio origen a este proceso, toda vez que la parte demandante dejó en el **abandono** la actuación sin dar muestras de **interés** en **seguir** con el **proceso**, actitud con la cual demuestra su voluntad o deseo de **desistir tácitamente** el desarrollo de la pretensión que interpuso, razones suficientes que llevan a esta oficina judicial a **decretar el desistimiento tácito** y por ende la **terminación** del proceso, y el **levantamiento** de las **medidas cautelares** practicadas si **fuere el caso**, advirtiéndose que en el evento de existir embargo de remanentes, los mismos se deberán ponerse a disposición del Juzgado que lo haya

comunicado, librándose para ello el oficio respectivo, debiéndosele advertir que la **demanda** no podrá presentarse nuevamente, sino pasados **seis (06) meses** después de la ejecutoria de la presente decisión

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Promiscuo Municipal de Tausa (Cundinamarca)**, en cumplimiento de sus funciones legales,

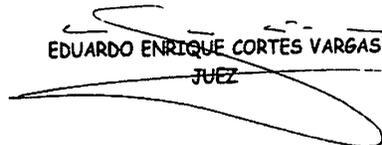
RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR el desistimiento tácito en el presente proceso ejecutivo, seguido por **María Sánchez Rojas**, en contra de **Juan Alberto Peláez Amorocho** al haber permanecido inactivo en la secretaría del despacho, por no solicitarse o realizarse ninguna actuación durante el **plazo de dos (2) años** en primera instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, de conformidad con lo normado en el artículo 317 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: ORDENAR como consecuencia de lo anterior, la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares practicadas si fuere el caso, advirtiéndose que en el evento de existir embargo de remanentes, los mismos se deberán poner a disposición del Juzgado que lo haya comunicado, librándose para ello el oficio respectivo.

TERCERO: INDICAR para todos los efectos legales, que la **demanda** no podrá presentarse nuevamente, sino pasados **seis (06) meses** después de la ejecutoria de la presente decisión, teniéndose además que una vez en firme la misma en el evento de no interponerse los recursos ordinarios que proceden en su contra, se deberán archivar las diligencias, previas las constancias y desanotaciones respectivas en los libros que para el efecto se llevan en el juzgado, agregándose que **no hay lugar a condenar en costas**.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


EDUARDO ENRIQUE CORTÉS VARGAS
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No. <u>34</u> Hoy <u>08-07-2021</u>
 Martha Isabel Gómez Vanegas Secretaria

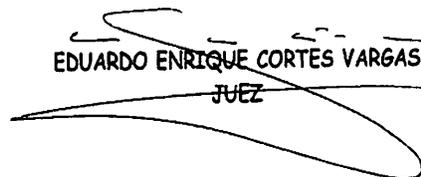
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL
Tausa, Cundinamarca, julio 07 de 2021

Fijación de Cuota de Alimentos No. 2020-019
Demandante: María Inés Ahumada Sánchez
Demandado: Melco Armando Rodríguez Sierra

Incorpórese a los autos los documentos allegados por la demandante, advirtiéndole que los mismos no producirán los efectos pretendidos, como quiera que no se reúnen los presupuestos consagrados en el artículo 292 del Código General del Proceso y artículo 8 del Decreto 806 de 2020, téngase en cuenta que la Oficina Postal inter rapidísimo, no certifica que junto con el aviso se hubiese remitido el auto admisorio, demanda y anexos.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


EDUARDO ENRIQUE CORTÉS VARGAS
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO	
La providencia anterior es notificada por anotación en	
ESTADO No. <u>34</u>	Hoy <u>08-07-2021</u>
 Martha Isabel Gómez Vanegas Secretaria	

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Tausa, Cundinamarca, julio 07 de 2021

Radicación: Proceso N° 2021-0039-00
Demandante: Mónica Zabala Bello
Demandado: Inversiones Visa Ltda y personas Indeterminadas
Decisión: Admite demanda, ordena tramite

Teniendo en cuenta que la anterior **demanda de declaración de pertenencia** instaurada por **Mónica Zabala Bello** en contra de **inversiones visa Ltda representada legalmente por León Vinkel y Personas Indeterminadas** reúne las exigencias de los artículos 82, 83, 84 y 374 del **Código General del proceso**, se torna viable que el despacho conforme al artículo 90 del estatuto referenciado la **ADMITA** ordenando **imprimirle al proceso el trámite establecido para los procesos declarativos consagrado en el libro tercero, sección primera, título primero, capítulos primero y once y artículo 375 y siguientes del C.G.P., disponiéndose la inscripción de la demanda como medida cautelar oficiosa en el folio de matrícula inmobiliaria N° 172-48096 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ubaté, librándose para ello el oficio correspondiente dirigido a dicha entidad.**

De otro lado **notifíquese personalmente el presente auto admisorio** a la parte demandada, quien tendrá para contestar la demanda el **termino de 20 días hábiles**, corriéndoles traslado de la misma, acto procesal que se hará de conformidad con lo estipulado en el artículo 291 y ss., del **C.G.P.**, **informándose de la existencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y registro, a la Agencia Nacional de Tierras, a la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi Igac** para que, si lo consideran pertinente, hagan las declaraciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones.

Igualmente se dispone **EMPLAZAR** a las personas indeterminadas que se crean con derechos sobre el bien perseguido en usucapión denominados **"El mirador de Tausa folio de matrícula inmobiliaria No. 172-480966**, ubicado en la Vereda Páramo Bajo del **Municipio de Tausa Cundinamarca**, para lo cual la parte demandante deberá mediante la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase de proceso, y el juzgado que lo requiere, en un listado que se publicará por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación nacional como el diario **EL Tiempo y/o El Espectador** el día domingo y en la **Emisora local** de seis de la mañana a las once de la noche, debiendo el interesado allegar al proceso **copia informal** de la página respectiva donde se hubiere **publicado el listado** al igual que constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario, luego de lo cual el **interesado** remitirá una comunicación al **Registro Nacional de Personas Emplazadas** incluyendo el nombre del sujeto emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, pasándose después de surtido el emplazamiento a la designación de curador ad litem.

Anotar que de acuerdo a lo consagrado en el numeral séptimo del **artículo 375 del CGP**, el **demandante** deberá **instalar** una **valla** de dimensión no inferior a un metro cuadrado, en un lugar **visible** del predio objeto del proceso, junto a la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o limite, valla que deberá contener la denominación del juzgado que adelanta el proceso, el nombre del demandante, el nombre del demandado, el número de radicación del proceso, la indicación de que se trata de un proceso de pertenencia, los linderos el emplazamiento de todas las personas que crean tener derechos sobre el inmueble, para que concurran al proceso, la identificación con que se conoce al predio, datos que deberán estar escritos en letra de tamaño no inferior a siete centímetros de alto por cinco centímetros de ancho debiendo el demandante aportar fotografías o mensaje de datos del inmueble en las que se observe el contenido de ellos, valla que estará instalada hasta la diligencia de **inspección judicial**.

Reseñar que inscrita la **demanda** y aportadas las **fotografías** se ordenará efectuar la **inclusión** del contenido de la **valla** o del **aviso** en el **Registro Nacional de Procesos de Pertenencia** que lleva el Consejo Superior de la Judicatura en la página web, por el término de **un mes**, dentro del cual podrán contestar la demanda las personas emplazadas, advirtiéndose que quienes concurran después tomaran el proceso en el estado en que se encuentre; disponiendo finalmente el despacho **reconocer** y **autorizar** al **Doctor Abel Hernando López Rincón** identificada con **Cedula de Ciudadanía N° 3.195.837** y **T.P. N° 204422** expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, como **apoderado Judicial** de la parte demandante en los términos y para los fines del **mandato** conferido.

RADÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EDUARDO ENRIQUE CORTÉS VARGAS
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La providencia anterior es notificada por anotación en
ESTADO No. 34 Hoy 08-07-2021


Martha Isabel Gómez Vanegas
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
Tausa, julio 07 de 2021

Radicación: Proceso ejecutivo N° 2021-00018
Demandante: Lucy Leonor Páez de Sierra
Demandado: José Mauricio Suarez Arévalo
Decisión: Admite corrección demanda

ASUNTO

Procede el despacho a resolver la petición de corrección y reforma de la demanda que formula el Doctor **Carlos Fernando Robayo Pachón**, apoderado de la demandante **Lucy Leonor Páez De Sierra**, efectuando para ello una motivación breve y precisa tal como lo dispone el artículo 279 del C.G.P.

ANTECEDENTES

Mediante demanda presentada a través de apoderado judicial, la señora **Lucy Leonor Páez De Sierra** solicitó al despacho se libraré a su favor y en contra del demandado **José Mauricio Suarez Arévalo**, mandamiento ejecutivo por la suma de \$46.000.000 correspondientes al saldo de la obligación contraída en el contrato de compraventa del vehículo de placas **SRO785**, suscrito el 18 de marzo de 2020 aportado como título ejecutivo, más sus intereses moratorios, al igual que la suma de \$ 13.600.000, por concepto de cláusula penal al igual que por las costas del proceso, demanda que al reunir, junto con el título allegado base de la ejecución, los requisitos legales, se aceptó su trámite, emitiéndose mandamiento ejecutivo por los valores requeridos, decretándose simultáneamente medidas cautelares, notificándose luego y corriéndosele traslado al ejecutado quien, a través de apoderada judicial, interpuso, inicialmente, recurso de reposición que le fue negado, contestando la misma proponiendo excepciones de mérito o fondo durante el término concedido para ello.

Posteriormente, el 10 de junio de 2021, el apoderado de la parte demandante, presentó corrección y reforma de la demanda, rectificando la pretensión primera, en el sentido de solicitar en esta oportunidad librar mandamiento de pago por la suma de \$ 36.000.000 millones de pesos y no por \$46.000.000 millones como se había reclamado inicialmente, en virtud a que no se había tenido en cuenta un abono, sin expedición de recibo, realizado por el demandado de \$ 10.000.000 millones al momento del traspaso del vehículo objeto del contrato exigido a la demandante por el ejecutado, anotando en relación a los hechos, que el cupo del vehículo ya había sido legalizado por el anterior propietario **Néstor Darío Páez Jiménez**, quedando así liberada de esa obligación su poderdante **Lucy Leonor Páez de Sierra**, restando únicamente por solicitar la actual propiedad o poseedor del automotor la cesión del cupo legalizado, actividad que solamente puede efectuar esta última.

CONSIDERACIONES

Sobre el tema, se tiene que el artículo 93 del Código General del Proceso, indica que el demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial, agregando que procede, por una sola vez, cuando se dan las reglas que allí consagra, como son, que solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas, advirtiendo, que no podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de algunas o incluir nuevas.

De la anterior norma se desprende, que el legislador solo desarrolla lo atinente a la reforma de la demanda sin precisar lo concerniente a la corrección y aclaración de la misma, delimitando únicamente en común para las tres situaciones, la oportunidad en que se puede cumplir, esto es, desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial, señalando igualmente la jurisprudencia, específicamente en lo que tiene que ver con la reforma, que esta se da o configura cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que se fundamente, así como también cuando se pidan nuevas pruebas.

En este asunto tenemos, que el apoderado de la demandante anuncia con un nuevo escrito, la corrección y reforma de la demanda ejecutiva inicialmente formulada, dando a entender que procede una de las dos figuras, toda vez que dada las obligaciones pactadas voluntariamente entre demandante y demandado en el contrato de compraventa de vehículo traído o allegado como título ejecutivo donde se acordó el pago del saldo en la suma de \$ 46'000.000 millones sometida a unas condiciones, sobre el mismo se produjo el abono de \$ 10'000.000 millones al efectuarse el traspaso del automotor que exigió la demandante al ejecutado, solicitando, en consecuencia, se libre mandamiento ejecutivo por el valor de \$ 36'000.000 millones más los intereses comerciales moratorios al igual que por el monto de la cláusula penal que se dejó en la cantidad de \$ 13'600.000, costas, daños y perjuicios que tase el juzgado.

En estas condiciones, observa el despacho, que al haberse generado un abono sobre el saldo de la obligación directamente por el demandado, incluso antes de instaurarse la demanda disminuyéndose el capital y los intereses, aclarando y/o rectificando también la parte demandante el hecho que tiene que ver con el cupo del automotor, del cual afirma ya se encuentra legalizado ante el Ministerio del Transporte lo cual pretende enmendar mediante la presentación de nueva demanda, se tiene que con ello en realidad no se está reformando la demanda sino corrigiendo o aclarando una de las pretensiones y rectificando o aclarando el hecho relativo al cupo del rodante respecto a lo aseverado en la inicial, finalidad que, en sentir del despacho, se cumple reportando y acreditando tanto el abono efectuado como lo concerniente a la legalización del cupo, sin necesidad de una reforma que en este contexto resulta innecesaria.

Lo anterior, por cuanto de un lado, dicho abono lo hace ver tanto el apoderado de la demandante al igual que la apoderada del demandado al formular las excepciones de mérito, y,

de otro, la cancelación de ese dinero que luego de presentada la demanda y notificada al ejecutado da a **conocer** junto con la **rectificación** o **aclaración** del tema relativo a la **legalización del cupo** la parte demandante al formular la petición de corrección y reforma, situaciones que perfectamente pueden **corregirse** y/o **aclararse** de manera inmediata, o **incidir** sobre la eventual **liquidación del crédito**, incluso también pudiéndose precisar este abono y lo concerniente a la legalización del cupo, al momento de emitir decisión de seguir adelante con la ejecución si se llega a esa instancia, todo ello sin **afectar** o **alterar** el **fluido desarrollo** del proceso en razón al **principio de celeridad**, evitándose así alguna **demora** en su trámite y **definición**.

De otro lado, **precisa** el despacho, que el **legislador** en el **artículo 93 del CGP** condiciona la viabilidad de la **reforma**, únicamente cuando existe **alteración** de las partes, o de las **pretensiones** o de los **hechos** en que se fundamenten o se **pidan** o **alleguen** nuevas pruebas, evidenciándose nítidamente que allí hace **alusión** a tres conductas como son **alterar**, **pedir** y **allegar** que conforme a su **significado jurídico**, la primera, es decir, **alterar**, se traduce en cambiar la esencia o forma de una cosa, mientras que la segunda, **pedir**, conlleva solicitar, expresar o demandar a alguien que dé o haga una cosa, mientras que **allegar**, significa agregar o añadir.

Con lo anterior, resulta **claro** que cuando la **norma** se refiere a la **alteración** de las **pretensiones** o de los **hechos** en que ellas se fundamentan como presupuesto para **considerar** que **existe reforma** de la **demanda**, en criterio de esta oficina judicial y tratándose de **procesos ejecutivos**, dicha **alteración** se debe **estudiar** analizando, como en este caso, si la **obligación** cobrada **cambio** en su **esencia**, es decir si es nueva o distinta a la inicial demandada, o si paso la **ejecución** de ser por una suma de dinero, a una obligación de dar, hacer, no hacer, o por obligación alternativa o de suscribir documentos, que conforme a lo ya expuesto **no se presenta** en la petición del apoderado solicitante, ya que la **obligación demandada sigue siendo** la misma, esto es, que el **demandado pague** una suma de dinero consistente en el saldo del precio acordado en el **contrato de compraventa de vehículo** donde asegura se dio un **abono** y que la **condición** para su **cancelación** como lo es la **legalización del cupo** se encuentra a la fecha cumplido.

En **conclusión**, una vez decantada la **actuación** surgida entre **demandante** y **demandado** donde existe una **rectificación** y/o **aclaración** respecto al **hecho** relativo a la legalización del cupo, **informándose** igualmente de un **abono** al saldo de la **obligación** por la suma de \$ 10'000.000 millones de pesos, se tiene que en **sentido estricto** esa situación **no entraña** un caso de **reforma procesal** de la **demanda** por **ausencia** de alguno de los **eventos** que contempla el **artículo 93, inciso segundo, numeral 1 del CGP**, es decir **alteración** sustancial de las **pretensiones** y de los **hechos**, ni ser una **nueva obligación** diferente a la que **emana** del **contrato de compraventa de vehículo** base de la ejecución que conlleve a **originar** un **nuevo mandamiento ejecutivo** como lo solicita el apoderado de la demandante, sino de **rectificación** y/o **aclaración** que surge **tácitamente** de lo narrado en el escrito, y de **corrección** o **aclaración** que es mencionado **expresamente** por el mismo junto con la reforma, **precisando** la cifra que persigue **cobrar** con el **ejecutivo**, tornándose en consecuencia **viable**, al no haberse señalado aún fecha para el desarrollo de la audiencia inicial, **admitir** la **corrección** de la **demanda** y por lo tanto del **mandamiento de pago** librado en este asunto.

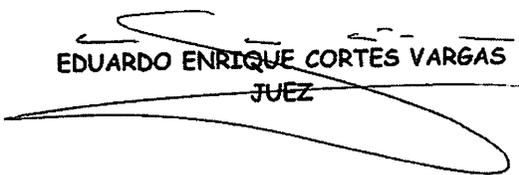
En **MÉRITO** de lo **EXPUESTO**, el **JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL** de **TAUSA (CUNDINAMARCA)**, en cumplimiento de sus **FUNCIONES LEGALES**,

RESUELVE

PRIMERO: ADMITIR la **CORRECCIÓN Y/O ACLARACIÓN** de la **DEMANDA EJECUTIVA** presenta por el **APODERADO** judicial de **LUCY LEONOR PÁEZ DE SIERRA** con base en el **artículo 93** del **Código General del Proceso**, sin que se acceda a su **reforma**, ya que la **rectificación y/o aclaración** respecto a la **legalización del cupo** y el **abono** efectuado que conlleva la **corrección y/o aclaración del capital cobrado**, no entrañan un caso de **reforma procesal** de la **demanda** que origine un nuevo **mandamiento ejecutivo** como lo solicita el **apoderado de la demandante**.

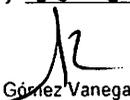
SEGUNDO: CORREGIR Y/O ACLARAR el **MANDAMIENTO EJECUTIVO** de pago librado a favor de **Lucy Leonor Páez de Sierra** y en contra de **José Mauricio Suarez Arévalo** en el sentido de precisar que el **capital a pagar** es de **\$ 36.000.000 millones**, por concepto del **saldo del valor total del vehículo objeto del contrato de compraventa**, quedando **intactos** sin **corrección alguna** los otros **montos o sumas reclamadas** y ordenados en el **mandamiento ejecutivo** dictado en este asunto, disponiéndose **tener en cuenta y valorar** en el **curso del proceso** la **RECTIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN** efectuada al **HECHO** de la **demanda** que contiene lo relativo al **cupo del vehículo objeto del contrato** base de la presente **ejecución**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDUARDO ENRIQUE CORTÉS VARGAS
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO

La providencia anterior es notificada por anotación en
ESTADO No. 34 Hoy 08-07-2021


Martha Isabel Gómez Vanegas
Secretaría